



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**"PEÑA LEÓN RONALD GIOVANNY C/ GCBA S/ AMPARO A
39123-2015/0"**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ²⁶ de octubre de 2015.

Y VISTOS: los autos señalados en el epígrafe venidos a despacho a fin de resolver la medida cautelar requerida.

CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 1/23 se presenta **RONALD GIOVANNY PEÑA LEON** (DNI: 94.150.691), por derecho propio, a fin de deducir acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Defensor Oficial, Dr. Pablo de Giovanni, el que, según señala ha afectado derechos y garantías de rango constitucional, en particular, el derecho a la vivienda, a la salud y a la dignidad.

En lo que aquí interesa resolver, en el punto III de fs. 19 vta., la parte actora solicita el dictado de una medida cautelar a fin de que el tribunal ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adopte los recaudos necesarios para reinstalarlo provisionalmente y hasta tanto se concrete efectivamente la condena de fondo como beneficiario de los programas de asistencia habitacional y disponer una prestación económica que comporte un auxilio cierto, concreto y suficiente para el acceso a un alojamiento que reúna las condiciones dignas de habitabilidad.

Manifiesta el actor que es un hombre discapacitado, que se encuentra en situación de inestabilidad habitacional y vulnerabilidad social de la que no puede salir por sus propios medios. Relata que posee graves problemas de salud e ingresos que no resultan suficientes para afrontar sus necesidades básicas.

Señalo que la propietaria de la vivienda que ocupa lo intimó a abonar la deuda correspondiente a los meses de junio a septiembre del corriente año, lo que asciende a la suma de diez mil pesos (\$10.000), con más la de dos mil setecientos pesos (\$2700) correspondiente al mes en curso, y que en caso contrario deberá desalojar la vivienda.

Aclara que en la actualidad se encuentra desocupado y sin posibilidades ciertas de acceder al mercado laboral dada su discapacidad. Al respecto refiere que le produce una deformidad esquelética lo que se traduce en un aspecto físico no convencional.

Destaca que sufre una enfermedad congénita progresiva y degenerativa llamada síndrome de Marfán que le afecta los sistemas esquelético y cardiovascular como así también los ojos y la piel.

Agrega que realiza enormes esfuerzos para mantener su obra Social -OSDEPYN- ya que es la única manera de obtener los medicamentos y tratamientos que requiere su dolencia. Es por ello que continúa inscripto en el monotributo el cual se encuentra acumulando deuda.

Señala que cuenta con formación universitaria de Psicólogo pero debido a sus problemas de salud no logra acceder a un trabajo estable.

Respecto a su situación económica manifiesta que percibe quinientos pesos (\$500) como beneficiario del Programa de Ciudadanía Porteña con más trabajos esporádicos que realiza por tratamientos terapéuticos.

Menciona que no le es posible acceder a una pensión por invalidez ya que es extranjero y resulta ser requisito, tener mínimamente veinte años de residencia en el país para obtenerla, supuesto que no posee.

Refiere que nació en Colombia y vino al país en el año 2007, gracias a la ayuda económica de su Gobierno para continuar con sus estudios profesionales. Describe que no cuenta con vínculos familiares o alguna red de contención que le pueda brindar algún tipo de ayuda económica ni en la argentina ni en su país de origen.

Manifiesta que en el año 2012 se encontró sin posibilidades de generar ingresos para el sustento propio y que por sus problemas de salud se vio imposibilitado de continuar con sus estudios.

Posteriormente, menciona que ante la imposibilidad de cubrir los gastos de vivienda, concurrió al GCBA, al Programa de Atención de Familias en Situación de Calle y le otorgaron el beneficio establecido en el decreto N° 690-GCBA-06, percibiendo diez cuotas con las que abonó el alquiler de la vivienda que ocupa, hasta que logró acceder nuevamente a un trabajo y así durante un tiempo pudo sostenerse económicamente.

Sin embargo desde el mes de mayo de 2015 debido a problemas de salud no pudo continuar con el trabajo que tenía ni reunir el dinero para cubrir sus necesidades básicas por lo que comenzó a acumular la deuda de alquiler.



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Finalmente aduce que solicitó por nota de registro Nº EE2015-19108889-MGEYA-DGDAI la extensión del subsidio, la petición fue contestada negativamente, informando que percibió el monto total del subsidio.

II. Que, asentado lo expuesto, cabe destacar que si bien es cierto que la diversidad de situaciones que hacen necesaria y procedente una medida cautelar dificulta la doctrina de sus presupuestos, en términos generales pueden señalarse por lo menos dos de ellos cuya reunión resulta indispensable para su admisión: la existencia de un derecho verosímil garantizado por el ordenamiento (puesto que constituyen un adelanto de la garantía jurisdiccional) y un interés jurídico que justifique el adelanto del resultado del proceso. Ese interés de obrar es el "*peligro en la demora*" que da características propias a las medidas cautelares (CCAyT, Sala II, "*Cresto Juan José y otros c/ GCBA s/amparo*", del 16/09/05).

En ese sentido en el artículo 15 de la ley 2145 se dispone, en lo que aquí interesa, que "*[e]n la acción de amparo, como accesorio al principal, con criterio excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva*", y que: "*En las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: a) Verosimilitud del derecho; b) Peligro en la demora; c) No frustración del interés público; d) Contracautela...*".

III. Que, en cuanto al marco normativo que regula la presente situación, corresponde señalar que el artículo 17 de la Constitución local dispone: "*La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades*".

Más adelante, en relación directa con la cuestión de autos, establece: "*La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1) Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos; 2) Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la*

regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva; 3) Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones" (art. 31).

En ese contexto, el Gobierno local dictó el decreto 690/06 (modificado por el decreto 960/08, BOCABA 2982, del 13/8/2008 y por el decreto 167/11, BOCABA del 11/04/2011) con la finalidad de "...mitigar la emergencia habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo primordial es el fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales, debiendo los fondos otorgados estar destinados a cubrir los gastos de alojamiento" (cfr. art. 3, dec. 690/06, con las modificaciones del dec. 960/08, y 167/11).

En la actualidad, cabe señalar que la Administración, mediante el decreto 239/13, determinó "que el aumento de los costos habitacionales en razón de los altos índices inflacionarios que sufre nuestro país, motiva una nueva elevación o ajuste del monto del subsidio", e incrementó la suma establecida por el artículo 5 del decreto 690/06 y sus modificatorios.

Posteriormente, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 3706 que considera personas en situación de calle "...a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno." (art. 2. inc. a.)

Además, sancionó la ley 4036, la cual tiene por objeto: "la protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires." (conf. art. 1º).

Por su parte, en su artículo 6º define la vulnerabilidad social como "la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos." Y, particularmente, considera a las personas en situación de vulnerabilidad social como "...a aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos".



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IV. Que las constancias acompañadas si bien no han logrado acreditar todos los asertos referidos en el escrito de inicio, permiten conjeturar, en este estadio preliminar, que se encontrarían reunidos los requisitos que habilitarían el dictado de una medida cautelar que, aún cuando pudiera diferir de lo solicitado, procuraría, al menos en forma transitoria, paliar la situación en la que se encuentra en la actualidad.

En tal sentido, conforme la certificación cuya copia luce a fs. 28, expedida en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de mayo de 2010 (válido hasta el 19 de octubre de 2019), resulta en principio acreditado que el actor presenta una discapacidad.

En efecto, del informe producido por el Hospital "Dr. Pedro Lagleyze" acompañado a fs. 32/33, surge que el Servicio Social del Hospital intervino para promover su acceso a un subsidio habitacional, atento su situación de desocupación.

En el mismo sentido, del informe social efectuado por el *Ministerio Público de la Defensa*, acompañado a fs. 35/38, surge que abona dos mil quinientos pesos (\$2500) mensuales de canon por la habitación que alquila, adeudando al presente los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

En cuanto a sus ingresos, el actor declaró en el informe que se encuentra desocupado desde mayo de 2015, y que eventualmente efectúa tareas de acompañamiento terapéutico, como así también que es titular del Programa "*Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho*", por un monto de quinientos diez pesos (\$510), que destina a la compra de alimentos y productos de limpieza, y que abona la suma de quinientos treinta pesos (\$530) por el monotributo para mantener la obra social para poder solventar los gastos necesarios por su patología.

Respecto de su salud, del informe se desprende que padece una enfermedad congénita deformativa por la que padece problemas cardíacos, prolapso de la válvula mitral, dilatación aórtica e hipertensión pulmonar, y que por su problema de visión, tras padecer tres desprendimientos de retina, perdió la visión de su ojo izquierdo. Debido a sus dolencias, recibe tratamiento y se encuentra medicado.

En el informe se destaca que "*se visualizó en el entrevistado dificultad para movilizarse*", como así también que "*no*

puede efectuar esfuerzo ni mantenerse mucho tiempo de pie", y que "se agita con facilidad".

También señala que en 2012 fue beneficiario de un subsidio habitacional, lo que le permitió abonar el alquiler de la habitación en la que vive en la actualidad, pero que luego de cobrar las diez cuotas establecidas en el mismo, le fue interrumpido.

No obstante lo expresado, del informe antes mentado -glosado a fs. 31/32- se desprende que no cuenta con una red social ni familiar de contención que le posibilite superar su situación habitacional; cuadro que se agrava por encontrarse el actor desempleado.

V. Por lo demás, cabe destacar que el actor acompañó certificado de discapacidad (en copia, fs. 28), un informe del Hospital "Muñiz" que describe su patología (fs. 29), y solicitudes de renovación del subsidio habitacional (fs. 42 y 47), que originaran la respuesta e informe de fs. 62/63, que entre otras cosas, señala que al haber percibido el monto total acordado, no resultaba viable la renovación.

En suma, más allá de su formación educativa, atento la situación referida en el informe glosado a fs. 31/32 y que el amparista padece de una discapacidad que, si bien no lo inhabilitaría para trabajar completamente, podría considerarse *prima facie* como una causal que le impediría desarrollar debidamente su oficio.

En ese sentido, no resulta ocioso remarcar que el actor -en tanto persona afectada por una discapacidad- responde a una categoría que merece especial atención por parte del Estado, por cuanto *"La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educativas, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes"* (confr. art. 42 de la CCABA).

VI. Que, de acuerdo a los principios constitucionales expuestos, dentro del acotado marco de conocimiento de la medida cautelar en esta etapa preliminar del proceso y, sin que lo que aquí se decide importe anticipar opinión alguna sobre la cuestión de fondo planteada, teniendo en cuenta la particular situación del actor invocada en el escrito de demanda y acreditada sumariamente con la



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

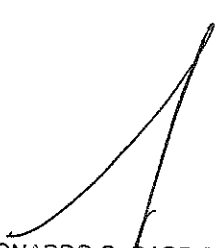
documentación anejada, ante la amenaza de sufrir un perjuicio irreparable a su derecho de no otorgársele la tutela precautoria, corresponde acceder a la medida cautelar solicitada. Sin embargo toda vez que, como se refiriera, la discapacidad que padecería el actor no se presentaría *prima facie* como inhabilitante a los efectos laborales, corresponde ordenar que el GCBA tenga bien incluir en alguno de los programas habitacionales de los que dispone en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires *por el término y plazos previstos* en el programa pertinente.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

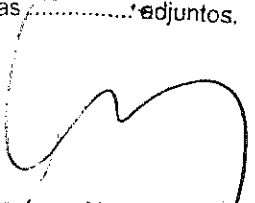
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar a la demandada que arbitre los medios necesarios a fin de incluir al señor **RONALD GIOVANNY PEÑA LEON** (DNI: 94.150.691) en alguno de los programas habitacionales vigentes conforme la duración prevista en el programa asignado, de conformidad con los fundamentos expresados en el considerando VI, haciéndole saber que deberá informar a este juzgado el cumplimiento de la manda ordenada, dentro del plazo de tres (3) días.
2. Tener por prestada la caución juratoria con la presentación inicial, la que se estima suficiente y ajustada a derecho.
3. Regístrese, notifíquese al Defensor Oficial en su público despacho, y al GCBA junto con el traslado de la demanda (art. 11, ley 2145). La confección de dicha cédula queda a cargo de la parte actora.


MARTIN CONVERSE
Juez Suprogante

EN 27/10/2015 se remiten las presentes actuaciones a la Defensora N°2
en 1 opo con 78 fs. Conste.


LEONARDO G. BARRIOS
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO JUZGADO Nº 1
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Recibido en esta defensoria a las ^{09:00} hoy 27/10/15
en 78 fojas adjuntos.


Constanza M. VILLANUEVA
SECRETARIA(Int.)
Defensoria CAyT N°2